

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Campeche por los Sres. Rafael Preciat é hijos y José H. Lavalle de este comercio, contra la Tesorería del municipio de la capital de ese Estado, que les cobra el derecho de consumo, por los efectos nacionalizados é introducidos á este Estado del puerto del Progreso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Fiscal dice: desde el 30 del pasado en que se me entregaron por la primera vez en traslado estas diligencias, me penetré de que la tesorería municipal al cobrar á los efectos recibidos en el Progreso por los Sres. Preciat é hijos y José H. Lavalle un derecho establecido por decreto del Estado de 4 de Diciembre del año pasado, en reciprocidad de los que se cobran en el Estado de Yucatan con el nombre de derecho de consumo, atacaba el art. 102 de la Constitución Federal, puesto que tal derecho no es mas que un recargo al de importacion impuesto á los efectos extranjeros, que en manera alguna pueden decretar los Estados sin el consentimiento del congreso nacional. Así lo ha comprendido la Corte Suprema de Justicia de la nacion cuando como dicen bien los ocurran-tes, amparó por idéntico caso á los Sres. Ibarra, Dondé y C^o de Yucatan. Por cuyo motivo y demostrado como está que el decreto citado vulnera la primera de las leyes federales, el Fiscal concluye pidiendo que se sirva vd. conceder el amparo solicitado á los referidos Preciat y Lavalle, de acuerdo con las prevenciones de la ley de 20 de Enero de 1869.

Campeche, Agosto 7 de 1872.—*José Gomez.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Campeche, Agosto 19 de 1872.—Vis-
to este juicio de amparo promovido por los Sres. Rafael Preciat é hijos y José

H. Lavalle, de este comercio, contra la tesorería del municipio de esta capital que les cobra el derecho de consumo por los efectos nacionalizados é introducidos á este Estado del puerto del Progreso, con fundamento del decreto del Estado de 4 de Octubre de 1871, y considerando: que la fraccion 1^a art. 112 de la Constitución Federal establece, que los Estados no pueden, sin consentimiento del congreso de la Union recargar las importaciones con ningun derecho; que el art. 19 del arancel previene esto mismo cuando dice: que los efectos extranjeros pagarán solo los derechos que en él se les señala, sin que ninguna autoridad de los Estados pueda imponerles á su introduccion otros derechos; que el art. 83 del propio arancel es concordante del 19, ordenando ademas que ni por tránsito pueda cobrarse derecho alguno á los efectos extranjeros nacionalizados. Considerando: que tanto el art. 19 como el 83 citados, han sido derogados por la reciente ley de 31 de Mayo último; que esta derogacion demuestra que el congreso de la Union ha prestado el consentimiento que exige la Constitución; que por tal motivo, ya los Estados han adquirido el derecho de recargar las importaciones extranjeras, sea á título de tránsito ó de consumo. Considerando: que los efectos introducidos por D. Rafal Preciat é hijos y los introducidos por D. José H. Lavalle en el mes de Julio del presente año, están bajo la sancion de la ley de 31 de Mayo último que reformó el nuevo arancel, el cual comenzó á regir con anterioridad á la introduccion de los dichos efectos; que los introducidos por el propio Lavalle en 25 de Mayo del corriente año, lo están bajo la sancion constitucional, puesto que hasta aquella fecha no habia prestado su consentimiento el congreso de la Union, y por lo tanto no podian los Estados imponer derechos á la importacion extranjera, con cuanto mas considerarlo con vino, se declara:

Primero; la Justicia de la Union ampara al O. José H. Lavalle contra el cobro de los derechos que le exige la tesorería municipal por los efectos que importó el 25 de Mayo último.

Segundo; la misma Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Rafael Preciat é hijos y José H. Lavalle, contra el cobro que les hace la misma tesorería municipal, por derechos de Estado causados en la introduccion que hicieron de efectos nacionalizados en el mes de Julio del presente año.

Tercero; en cumplimiento de los artículos 13 y 27 de la ley de amparo vigente, líbrese copia de este fallo á la redaccion del periódico oficial del Estado para su publicacion, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.—*Pedro Montalvo.*—*Francisco Campos*, escribano.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 24 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 22 de Julio del corriente año promovieron en Campeche ante el juez de Distrito del Estado del mismo nombre, los Sres. Rafael Preciat é hijos y José H. Lavalle exponiendo: que los primeros por la canoa "Adela" y el segundo por la canoa "Libertad" y por el Pailebot "Atlas" habian recibido del puerto del Progreso, varios efectos extranjeros nacionalizados por el hecho de haber sido introducidos en aquel puerto; que la tesorería municipal de Campeche fundada en el decreto de este Estado fecha 4 de Diciembre del año próximo pasado, les ha querido cobrar el derecho municipal de que se habla en ese decreto, aplicando al caso el de Yucatan fecha 30 de Enero del presente año: y que siendo el impuesto referido inconstitucional porque es un recargo á la importacion extranjera hecha por Es-

tados sin el consentimiento del congreso general, consentimiento que es un requisito indispensable conforme al art. 112 de la Constitucion de la República, el cobro de tal derecho, funda la solicitud de amparo que presentan invocando la ley de 20 de Enero de 1869 cuyo art. 1º, fraccion 3ª sirve de base á su recurso. Visto el informe del tesorero municipal responsable del acto que se reclama explicando los hechos principales como los quejosos: el pedimento del Promotor Fiscal sosteniendo la procedencia legal de la queja y la sentencia del juez de Distrito, en la que fundando su resolucio, asienta que si bien por el art. 112 de la Constitucion Federal y por los artículos 19 y 83 del antiguo arancel, los Estados no pueden recargar las importaciones de efectos extranjeros con ningun derecho, sin consentimiento del congreso de la Union, este consentimiento lo han obtenido con la derogacion de aquellos artículos que contiene la ley Federal de 31 de Mayo de este año. Vistas las demas constancias y considerando: que el derecho municipal contra cuyo cobro reclaman los promoventes, ha sido impuesto por una ley anterior al permiso del congreso que considera el juez de Distrito en su sentencia; y que en tal concepto el derecho de que se trata siendo decretado sin el requisito constitucional que establece el art. 112 citado, el cobro de él, funda en justicia la queja que los promoventes han presentado apoyándose en la fraccion 3ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pues su imposicion en los términos dichos constituye una invasion de la autoridad de un Estado en la esfera de la autoridad de la Federacion.

Por las razones que expresa la consideracion anterior y con arreglo á la ley orgánica de 20 de Enero repetida se resuelve lo siguiente: Es de reformarse y se reforma la sentencia del juez de Distrito del Estado de Campeche pronunciada en la ciudad de este nombre á 19

de Agosto último declarándose: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Preciat é hijos y Lavalle contra el cobro del derecho municipal que ha querido hacerles el tesorero municipal de la propia ciudad fundado en el decreto de 4 de Diciembre de 1871.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que se sacó de su original. México, Noviembre 5 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por María Alejandra Ruiz, contra el C. Prefecto de Morelia, que consignó á su esposo Epitacio Arias, al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

Alejandra Ruiz, como esposa de Epitacio Arias, se presentó manifestando: que el C. Prefecto de esta capital, despues de haber absuelto á aquel en la causa que se le instruyó por sospechas de saltador, lo consignó al contingente, sin que precediese la calificación respectiva hecha por el jurado de que ha-

bla la ley de 17 de Mayo del corriente año.

La autoridad responsable no niega los hechos, ni ha probado sus asertos respecto á que Arias se haya manifestado conforme en prestar sus servicios al ejército.

Por otra parte, la quejosa ha presentado una certificación suscrita por el C. Presidente de calificaciones, en la que se manifiesta que Epitacio Arias no fué consignado por la autoridad política á dicho jurado, antes de habersele remitido á la Mayoría de Ordenes.

Es inconcuso pues, que el C. Prefecto de esta capital, violó en la persona de Epitacio Arias, las garantías que le conceden la Constitución general de la República y la ley de 17 de Mayo ya citada, por lo cual el Promotor fiscal pide á vd. se sirva declarar, que la Justicia de la Union ampara al C. Epitacio Arias, de los procedimientos del C. Prefecto de esta capital; y en consecuencia se le mande consignar al jurado de calificación, para que oyendo las excepciones alegadas por aquel, le ponga en libertad ó le destine en forma al contingente, si no prueba alguna.

Morelia, Octubre 2 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*

Es copia que certifico. Morelia, Octubre 8 de 1872.—*Isidro Aleman.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Morelia, Setiembre 7 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por María Alejandra Ruiz, esposa legítima de Epitacio Arias, quejándose del procedimiento del C. Prefecto de esta ciudad, que consignó á Arias al servicio de las armas sin los requisitos de la ley de 17 de Mayo de este año, juzgando con